

Santiago, dos de mayo de dos mil veinticuatro.

VISTOS:

En estos autos, el entonces Ministro en Visita Extraordinaria, señor Mario Carroza Espinosa, con fecha veinte de noviembre de dos mil dieciocho, dicta sentencia definitiva en la cual condena a Gustavo Delfín Marambio Lobos, en calidad de autor del delito de homicidio calificado de Agustín Contreras Santander y Manuel Valencia Cáceres, perpetrado el 11 de septiembre de 1974 en la ciudad de Santiago, previsto y sancionado en el artículo 391 N° 1 del Código Penal, a sufrir la pena única de cinco años y un día de presidio mayor en su grado mínimo. Igualmente, en el mismo delito, en calidad de cómplices, sanciona a Arcadio de las Mercedes Lobos Cisternas y Luis Marcos Castro Guajardo, a la pena única de cuatro años de presidio menor en su grado máximo. En ambos casos, se les aplicaron las penas accesorias del caso, imponiéndoles las costas del juicio y concediéndoles las penas sustitutivas a los últimos dos encartados.

Impugnada esta decisión, una de las Salas de la Corte de Apelaciones de Santiago, conociendo de los recursos enderezados en su contra, procede a confirmar la decisión penal, con declaración que, los hechos asentados, respecto de los sentenciados, configura dos delitos de lesiones menos graves, aplicándoles, en calidad de autores, dos penas de sesenta días de prisión en su grado máximo, accesorias legales, costas de la causa y se les concede la remisión condicional por el término de un año.

Finalmente, en contra de esta última sentencia, se dedujeron los recursos de casación que pasan a examinarse.

Y CONSIDERANDO:



I. EN CUANTO A LOS RECURSOS DE CASACIÓN EN LA FORMA.

PRIMERO: Que, por parte de la apoderada del Programa de Derechos Humanos de la Subsecretaría de Derechos Humanos, dependiente del Ministerio de Justicia y Derechos Humanos, se presenta un recurso de casación en la forma, el cual sustenta en la causal 9ª del artículo 541 del Código de Procedimiento Penal, en relación con los numerales 4 y 5 del artículo 500 del mismo cuerpo legal, lo que justifica en que la sentencia de segunda instancia no fue extendida en la forma dispuesta por la ley pues ella, al referirse a los recursos, elimina los considerandos relativos a la atenuante del artículo 211 del Código de Justicia Militar, las agravantes del artículo 12 numerales 8, 10, 11, 12 del Código Penal y la referencia al delito de secuestro con grave daño.

En síntesis, denuncia que la sentencia no entrega los fundamentos propios ni las razones legales o doctrinarias que sirven para arribar a su determinación, faltando razonamiento sobre lo dicho y toda referencia a lo planteado sobre la ejecución por omisión referente al delito de secuestro, al faltar con el deber de garante, la asunción de este deber, el no hacer, el resultado y la imputabilidad vía adición mental hipotética.

En concreto, solicita declarar la nulidad de la sentencia atacada y dictar, acto continuo y sin nueva vista, pero separadamente, una nueva sentencia de reemplazo, en la que se declare que se condena a Gustavo Delfín Marambio Olmos, Arcadio de las Mercedes Lobos Cisternas y Luis Marcos Castro Guajardo, como autores de dos delitos de secuestro calificado, en grado de consumado, cometidos en contra de las personas de Agustín Contreras Santander y don Manuel Valencia Cáceres, a las penas de 15 años de presidio mayor en su grado



medio, más las accesorias legales y costas de la causa.

SEGUNDO: Que, un similar recurso deduce el apoderado de la Agrupación de Familiares de Ejecutados Políticos, quien protesta en base a la causal del numeral 9ª del artículo 541 del Código de Procedimiento Penal, en relación con los numerales 4 y 5 del artículo 500 del mismo cuerpo legal.

En este caso, este articulista reclama bajo la idea que la sentencia de segunda instancia no fue extendida en la forma dispuesta por la ley pues, en su parecer, existen dos infracciones. La primera, se plantea sobre la base que existen hechos acreditados y que, en este caso, no fueron parte de aquellos que tomó en consideración la sentencia, con lo cual, el Tribunal, omite toda calificación. En particular, entiende asentado que los condenados propinaron golpes de puños y con elementos contundentes a las víctimas, además, se les privó ilegalmente de su libertad y, luego de ser asesinados, ellos procedieron a cavar dos fosas y enterrarlos en un lugar no destinado para ello, es decir, considera que existieron elementos suficientes para sustentar una sanción por el delito de inhumación ilegal y por el secuestro calificado de los afectados. Enseguida, como segundo capítulo de casación en la forma, plantea errores en lo que dice relación con el tratamiento entregado sobre la atenuante prevista en el artículo 211 del Código de Justicia Militar, la que es reconocida respecto del sentenciado Marambio Olmos, pero, en otro aspecto del fallo, se deja establecido que fue por orden de él que las víctimas estuvieron privadas de libertad, lo que conforma una inconsecuencia y contradicción que se erige como un vicio formal en el fallo.

En definitiva, pide que se anule la sentencia recurrida y se dicte una de reemplazo en que se condene a los tres sentenciados, en calidad de autores de



dos delitos consumados de secuestro calificado y dos delitos consumados de inhumación ilegal, dejando sin efecto la circunstancia atenuante del artículo 211 del Código de Justicia Militar respecto del sentenciado Marambio Olmos, estableciendo las máxima penas consagradas en la ley, junto con las accesorias legales y costas de la causa.

TERCERO: Que, entrando al análisis de ambas impugnaciones, lo primero que ha de plantearse es que la sentencia definitiva, como una respuesta judicial a las pretensiones de las partes, debe cumplir con ciertas exigencias de forma y de fondo que, según la materia, se sintetizan en los distintos cuerpos legales que los rigen y que se complementa con el Auto Acordado de la Corte Suprema sobre la forma de las sentencias. En el caso del procedimiento penal inquisitivo, es el artículo 500 del Código de Enjuiciamiento Penal el que determina el contorno y, por supuesto, el contenido de la sentencia definitiva ya sea esta de primera o segunda instancia.

En este caso, los recurrentes observan yerros en el fallo atacado y precisan omisiones en dos de las exigencias detalladas en los siguientes numerales. A saber, el 4°, el que establece la necesidad de contener: *Las consideraciones en cuya virtud se dan por probados o por no probados los hechos atribuidos a los procesados; o los que éstos alegan en su descargo, ya para negar su participación, ya para eximirse de responsabilidad, ya para atenuar ésta.* En tanto, también echan en falta el cumplimiento al requisito señalado en el numeral 5° del mismo artículo 500 del mentado cuerpo legal, el que ordena indicar: *Las razones legales o doctrinales que sirven para calificar el delito y sus circunstancias, tanto las agravantes como las atenuantes, y para establecer la responsabilidad o la*



irresponsabilidad civil de los procesados o de terceras personas citadas al juicio.

Sobre el primer reproche, se cuestiona que la decisión de segunda instancia, al resolver los recursos, elimina parte de los razonamientos del fallo de primer grado, en concreto aquellos en que se hace cargo de las acusaciones particulares, las agravantes por ellos invocadas y el que atiende la alegación de la obediencia debida o cumplimiento de órdenes antijurídicas, de conformidad al artículo 214 del Código de Justicia Militar, lo cual trae como resultado que la sentencia definitiva no contenga las motivaciones que exigen los numerales recién transcritos, en particular sobre dichos tópicos.

En este sentido, resulta efectivo que los sentenciadores de segundo grado, en la parte considerativa de su laudo, eliminan varias reflexiones de la decisión sometida a su revisión, ello en consonancia con la decisión que a continuación adoptan y en la que alteran la calificación jurídica acerca de los hechos asentados, lo cual permite entender que ellos descartan aquella posición jurídica planteada por los acusadores particulares y, pese a las diferentes interpretaciones que sobre el particular tengan dichos intervinientes, lo cierto es que su calificación jurídica responde a un aspecto de fondo que corresponde examinar a propósito de la acción de nulidad de fondo, debiendo por ello descartarse la misma en sede formal.

En cambio, en lo que dice relación a las circunstancias modificatorias, el caso es que su determinación o rechazo carece de toda fundamentación o razonamiento, siendo la minorante apuntada, incluso, considerada para determinar la pena aplicable a los sentenciados, lo cual conforma el vicio que precisamente advierten las recurrentes pues, al proceder de la forma que se viene describiendo, dicha decisión carece de razones legales o doctrinales que sirven para calificar las



circunstancias referentes a la responsabilidad criminal, condiciones en las cuales ha de acogerse el recurso presentado en este aspecto conforme se detallará en lo resolutivo.

II. EN CUANTO A LOS RECURSOS DE CASACIÓN EN EL FONDO.

CUARTO: Que, de igual forma, la representante de la Unidad Programa de Derechos Humanos presenta un recurso de casación en el fondo, el cual se sustenta en las causales contenidas en los numerales 2° y 7° del artículo 546 del Código de Procedimiento Penal. En este aspecto, denuncia que existió una errónea aplicación del derecho al haberse considerado que el actuar de los condenados se encuadra dentro del delito de lesiones menos graves, en circunstancias que, en su concepto, se les debió juzgar como autores del delito de secuestro con grave daño establecido en el artículo en el artículo 141 del Código Penal vigente a la época, tal como solicitó en su escrito de acusación particular. En este sentido, expone que el tribunal de alzada comete una flagrante violación de las leyes reguladoras de la prueba, desechando los antecedentes probatorios que hacen encasillar el hecho en el tipo penal secuestro calificado, así como otorgar la atenuante del artículo 211 del Código de Justicia Militar, infringiéndose de esta manera el artículo 488 numeral 1° y 2°, en relación con lo establecido en los artículos 479, 481, 485 del Código de Procedimiento Penal.

En consecuencia, pide que se invalide el referido fallo por las causales invocadas y dicte la correspondiente sentencia de reemplazo, en la que se declare que se condena a los enjuiciados, como autores de dos delitos de secuestro calificado en grado de consumado cometidos en contra de las personas de Agustín Contreras Santander y Manuel Valencia Cáceres, a las penas de 15 años



de presidio mayor en su grado medio, más las accesorias legales y costas de la causa.

QUINTO: Que, por parte del mandatario de la Agrupación de Familiares de Ejecutados Políticos, también se dedujo un recurso de casación en el fondo, en cuyo caso se sustenta en la causal del numeral 2° del artículo 546 del Código de Procedimiento Penal. En este arbitrio, se denuncia derechamente la infracción de los artículos 141 inciso tercero y 399, ambos del Código Penal vigente a la época de los hechos y, asimismo, del artículo 509 del Código de Procedimiento Penal, en particular en lo referente a la calificación de los hechos, estimando la ejecución de dos delitos de lesiones menos graves, en circunstancias que corresponde a delitos de secuestro calificado, como requirió en su escrito acusatorio.

En consecuencia, pide que se declare que la sentencia recurrida es nula y se dicte una reemplazo por la cual se condene a Gustavo Marambio Olmos, Arcadio Lobos Cisternas y Marcos Castro Guajardo como autores de dos delitos de secuestro calificado, previsto en el artículo 141 inciso tercero del Código Penal vigente a la época de los hechos, cometidos en las personas de Agustín Contreras Santander y Manuel Valencia Cáceres, estableciendo para cada uno de ellos la pena de quince años de presidio mayor en su grado medio, más accesorias legales y costas de la causa.

SEXTO: Que, conforme se constata de la revisión de estos últimos arbitrios, es posible evidenciar que ambos cuestionan la calificación jurídica que le entregan los sentenciadores y para ello acuden al motivo segundo del artículo 546 del Código de Procedimiento Penal, el que establece como un yerro de derecho el que la sentencia, haciendo una calificación equivocada del delito, aplique la pena



en conformidad a esa determinación, agregando uno de ellos que tal errónea calificación estaría vinculada a una también errónea valoración de las pruebas allegadas al proceso.

SÉPTIMO: Que, atendido lo anterior, lo primero que ha de resolverse es si las nulidades basadas en la causal del artículo 546 N° 2 del Código de Procedimiento Penal tienen mérito suficiente para la anulación del fallo recurrido por haber este incurrido en el error de hacer una calificación equivocada del delito, aplicando en consecuencia una pena diferente a la que correspondería de conformidad con su acertada calificación, alegación que lleva a investigar, primero, el verdadero sentido y alcance de las disposiciones legales que fundamentan la calificación propuesta por los recurrentes y, enseguida, a decidir, sin alterar los hechos que se han dado por establecidos por los sentenciadores del grado, si ellos configuran o no el supuesto de hecho de dicha figura de modo que calificarlos de manera diferente pueda considerarse un error de derecho susceptible de enmendarse por esta vía.

OCTAVO: Que, para realizar este análisis, cabe mencionar que, en el considerando tercero del fallo de primer grado, el cual se mantuvo en la sentencia de segunda instancia, se asentaron como hechos objeto de juzgamiento los siguientes:

“1.- Que, con posterioridad al pronunciamiento militar, efectivos del Regimiento Yungay de San Felipe viajaron hasta la ciudad de Santiago y permanecieron acantonados, luego de otros lugares, hasta el año 1974, en el interior del Parque Quinta Normal;

2.- Que, en ese contexto, en horas de la noche del día 09 de septiembre de



1974, una patrulla militar del Regimiento a cargo del Teniente de reserva Juan Martínez Oyanedel, procede a detener a tres personas que se encontraban en estado de ebriedad en un Bar ubicado al interior de la Población Huamachuco, de la comuna de Renca, por gritar consignas en contra de las Fuerzas Armadas;

3.- Que los detenidos fueron trasladados hasta dependencias del Parque Quinta Normal y ya en el interior, el Sargento de reserva Gustavo Marambio Olmos, que en esa oportunidad se desempeñaba como Comandante de guardia, habría decidido dejar en libertad a una de estas personas y mantener la privación de libertad de los otros dos, Agustín Contreras Santander y Manuel Jesús Valencia Cáceres;

4.- Que ambos detenidos fueron interrogados en la madrugada del día 11 de septiembre de 1.974, por el Oficial de Guardia, Teniente Juan Martínez Oyanedel, con la colaboración del Suboficial Gustavo Marambio Olmos y los soldados conscriptos Arcadio Lobos Cisternas y Luis Castro Guajardo, quienes les propinaron golpes de puños y bastonazos con elementos contundentes, hasta que el Teniente Juan Martínez con un corvo les quita la vida, luego Marambio, Lobos y Castro cavan sus fosas e inhuman sus restos en las inmediaciones del mismo parque;

5.- Que los informes autopsia de fojas 78 y 94 realizados en Servicio Médico Legal, explicitan que la causa de muerte de Agustín Contreras Santander fue la de heridas cortantes penetrantes de cuello con sección de vasos y constricción cérico-bucal y la de Manuel Jesús Valencia Cáceres, una herida cortante penetrante torácica.” (sic);

NOVENO: Que, lo anterior, en el fallo de primera instancia, es catalogado



como un delito de homicidio calificado de ambas víctimas, previsto y sancionado en el numeral 1° del artículo 391 del Código Penal, ello en el entendido que los responsables se aseguraron de que no hubiera de parte de ellas ninguna reacción defensiva y de ese modo, actuaron con total impunidad. En tanto, en segunda instancia, los sentenciadores modificaron dicho aspecto, considerando que la muerte de Contreras Santander y Valencia Cáceres fue ocasionada por el Teniente Juan Martínez Oyanedel (fallecido a la fecha), de tal manera que la conducta de los enjuiciados la circunscriben únicamente a los momentos anteriores a los homicidios, determinando que su accionar sólo ha de ser limitado a las lesiones ocasionadas a los afectados y es por ello que los califica de lesiones menos graves, todo lo cual se identifica como un delito de lesa humanidad según los principios generales del derecho internacional reconocidos por el Estatuto del Tribunal de Núremberg y las sentencias de dicho Tribunal, confirmados como tales por resolución unánime de la Asamblea General de las Naciones Unidas 95 (I), de fecha 14 de diciembre de 1946, vigentes al momento de su perpetración y, actualmente, recogidos en el texto del Estatuto de Roma.

DÉCIMO: Que, en cambio, como se señaló, la propuesta delictiva de los acusadores particulares y recurrentes de casación en el fondo corresponde a la figura calificada del secuestro, la cual se encuentra en el inciso 1° y 3° del artículo 141 del Código Penal de la época, en que se establece que: *“El que sin derecho encerrare o detuviere a otro privándole de su libertad... Si el encierro o la detención se prolongare por más de noventa días, o si de ellos resultare un daño grave en la persona o intereses del encerrado o detenido, la pena será presidio mayor en cualquiera de sus grados.”*



UNDÉCIMO: Que, para determinar cuál sería la correcta calificación de los hechos asentados, es necesario señalar que, en cuanto al delito de secuestro, el inciso 3° del artículo 141 del Código Penal de la época, exige que *el encierro o la detención se prolongare por más de noventa días, o si de ellos resultare un daño grave en la persona o intereses del encerrado o detenido.*

Los principales bienes jurídicos protegidos aquí son la seguridad individual y la libertad ambulatoria. Esta no es más que una especificación de la libertad, la capacidad de actuación en lo referente a la movilidad del sujeto, a trasladarse de un lugar a otro.

El secuestro es un delito de lesión y además es de aquellos delitos llamados permanentes, debido a que se realiza todo el tiempo mientras perdura la privación de la libertad. Esta última característica es importante, en lo que aquí respecta, para las cuestiones relativas a la participación, pues toda intervención voluntaria que durante el secuestro contribuya a la privación de libertad del secuestrado, a su mantenimiento en el tiempo o a la producción del grave daño causado, ha de considerarse punible, al título que corresponda a la forma específica de intervención señalada en los artículos 15 y 16 y en la disposición que, en el inciso segundo citado artículo 141, impone la misma pena del autor a quien proporcionare lugar para la ejecución del delito.

Los verbos rectores de la conducta son “encerrar” y “detener”. Las expresiones empleadas por la ley son comprensivas de toda privación de la libertad personal, tanto física como ambulatoria, entendiéndose como el derecho de los individuos de desplazarse de un lugar a otro o de permanecer en un lugar determinado. No es necesario que la privación de libertad sea absoluta. Es



indiferente, además, que el lugar de la detención o encierro sea público o privado. En efecto, la detención es la aprehensión de una persona, acompañada de la privación de su libertad e incluye conductas tales como el amarrar, aturdir, narcotizar, etc. Consiste en obligar a una persona a estar en un lugar contra de su voluntad, privándosela, así, de su libertad ambulatoria, siendo indiferente el medio empleado para ello. Por su parte, el encierro consiste en mantener a una persona en un lugar de donde no pueda escapar, aunque el espacio en que se le mantiene tenga salidas, que el encerrado no conoce o que su utilización sea para este peligrosa o inexigible.

Respecto de la participación en esta clase de delitos, tratándose de un delito permanente, la intervención posterior a la detención, p. ej., la custodia del secuestrado mientras dura el secuestro, debe calificarse como coautoría si se realizan actos que permiten perpetuar el estado antijurídico y concurren los requisitos del art. 15, aunque no haya existido acuerdo acerca de la detención previa ni se haya tomado parte en ella (SC Marcial 9.9.1969, RDJ 66, p. 222; SCA Santiago 7.12.2017, DJP 36, p. 29).

Además, para efectos de la imputación recíproca de los partícipes en un secuestro, respecto a las agravaciones por su duración o grave daño causado a la persona o intereses del secuestrado, de conformidad con el principio general establecido en el artículo 64 del texto punitivo, solo parece exigible respecto del copartícipe su conocimiento o aceptación al momento de intervenir, equivalente al dolo eventual respecto de la actuación de los otros (SC Marcial 26.1.1978, RDJ 75, p. 276).

Sobre el aspecto concursal, se debe advertir que, en muchos casos, una



detención o encierro temporal son necesarios para la comisión de otros hechos penados por la ley, como la violación o el robo con intimidación simple y calificado. En estas situaciones, cuando el período de privación de libertad no excede del necesario para la realización del delito a que se vincula, la figura de secuestro simple queda desplazada como acto meramente acompañante de esos otros delitos de mayor gravedad, según el principio de consunción (SCA Santiago 14.4.1994, RDJ 91, p. 47.). En cambio, cuando los mayores daños se producen después de comenzado el secuestro, las reglas de agravación de esta figura operan como reglas de subsidiariedad expresa, estableciendo la penalidad aplicable que prefiere a las reglas concursales comunes (SCS 17.8.1999, FM 489, p. 1743).

En síntesis, para tener por acreditada la existencia de las figuras agravadas de este delito por el daño causado, y la participación punible en el mismo, es necesario configurar fácticamente:

- a) Una detención o encierro sin derecho más o menos prolongada;
- b) Su prolongación por más de noventa días o la causación de un grave daño a la persona o intereses del secuestrado durante dicha detención o encierro; y
- c) La intervención voluntaria del inculpado en alguna de las formas de los artículos 15 a 16 o del inciso segundo del artículo 141 del Código Penal, en el momento del encierro o detención o durante la mantención del estado antijurídico que de ella resulta;
- d) El conocimiento o aceptación por parte del inculpado de la



prolongación del encierro o detención por más de noventa días o del grave daño causado por los otros intervinientes en el secuestro.

DUODÉCIMO: Que, a juicio de este Tribunal, tales exigencias para calificar los delitos de autos como secuestro agravado del artículo 141 inciso tercero del Código Penal vigente a la época, se infieren directamente de los hechos asentados en la causa, de modo que, al otorgarle una calificación distinta, los recurridos han incurrido en un error de derecho que debe enmendarse por esta vía. En efecto, está acreditado que:

a) Las víctimas Agustín Contreras Santander y Manuel Jesús Valencia Cáceres fueron detenidas, sin derecho, la noche del 9 de octubre de 1974, permaneciendo en tal estado antijurídico hasta la madrugada del día 11 de ese mes;

b) Que, durante esa detención, los acusados Gustavo Marambio Olmos, Arcadio Lobos Cisternas y Luis Castro Guajardo, junto con el fallecido Juan Martínez Oyanedel tomaron voluntariamente parte inmediata y directa en el interrogatorio y golpiza que se le dio a los detenidos la madrugada del 11 de octubre de 1974, hasta que Martínez, con un corvo les quita la vida, en su presencia y, por tanto, con su conocimiento y aceptación expresada por el hecho de no haber realizado nada para impedir tal luctuoso resultado.

DÉCIMO TERCERO: Que, en conformidad con lo expresado, al caracterizar los hechos establecidos como dos delitos de lesiones menos graves, en lugar de dos delitos de secuestro calificado, que era lo que correspondía, los jueces de alzada han incurrido en su sentencia en el vicio denunciado por los recurrentes, de



modo que los libelos serán acogidos a este respecto.

DÉCIMO CUARTO: Que, en lo tocante a la participación que les cupo a los encartados en los delitos precisados, ello será analizado en la sentencia de reemplazo que ha pronunciarse como consecuencia de los recursos aceptados.

Y visto, además, lo dispuesto en los artículos 535, 541, 546 y 547 del Código de Procedimiento Penal, se **RESUELVE:**

I. Que, se **RECHAZAN** el recurso de casación en la forma y el recurso de casación en el fondo, **el primero**, presentado por el apoderado de la Agrupación de Familiares de Ejecutados Políticos, interpuesto a lo principal de su presentación de fojas 1966 y siguientes, y; **el segundo**, enderezado por la apoderada de la Unidad Programa de Derechos Humanos, de la Subsecretaría de Derechos Humanos, interpuesto en el primer otrosí de su presentación de fojas 1958 y siguientes, ambos en contra de la sentencia de fecha veintiuno de abril de dos mil veintiuno.

II. Que, se **ACOGEN** el recurso de casación en la forma y el recurso de casación en el fondo, **el primero**, deducido por la apoderada de la Unidad Programa de Derechos Humanos, de la Subsecretaría de Derechos Humanos, interpuesto a lo principal de su presentación de fojas 1958 y siguientes; y, **el segundo**, interpuesto por el apoderado de la Agrupación de Familiares de Ejecutados Políticos, interpuesto en el primer otrosí de su escrito rolante a fojas 1966 y siguientes, ambos en contra de la



sentencia fechada veintiuno de abril de dos mil veintiuno, la que se anula parcialmente y se la reemplaza por la que se dicta a continuación, sin nueva vista, pero separadamente.

Regístrese.

Redacción del Ministro Sr. Matus

Rol N° 36.743-2021

Pronunciado por la Segunda Sala de la Corte Suprema integrada por los Ministros Sres. Manuel Antonio Valderrama R., Leopoldo Llanos S., Jean Pierre Matus A., la Ministra Sra. María Cristina Gajardo H., y la Abogada Integrante Sra. Pía Tavorari G. No firman el Ministro Sr. Llanos y la Ministra Sra. Gajardo no obstante haber estado en la vista de la causa y acuerdo del fallo, por estar con permiso y en comisión de servicios, respectivamente.

MANUEL ANTONIO VALDERRAMA
REBOLLEDO
MINISTRO
Fecha: 02/05/2024 14:48:21

JEAN PIERRE MATUS ACUÑA
MINISTRO
Fecha: 02/05/2024 14:48:22

PIA VERENA TAVOLARI GOYCOOLEA
ABOGADO INTEGRANTE
Fecha: 02/05/2024 14:26:08



Autoriza el Ministro de Fe de la Excma. Corte Suprema

JORGE EDUARDO SAEZ MARTIN
MINISTRO DE FE
Fecha: 02/05/2024 15:09:40

En Santiago, a dos de mayo de dos mil veinticuatro, notifiqué en Secretaría por el Estado Diario la resolución precedente, como asimismo personalmente al Fiscal Judicial de la Corte Suprema, quien no firmó.

JORGE EDUARDO SAEZ MARTIN
MINISTRO DE FE
Fecha: 02/05/2024 15:09:40



Santiago, dos de mayo de dos mil veinticuatro.

En cumplimiento de lo prescrito en el artículo 544 del Código de Enjuiciamiento Criminal, lo ordenado por la decisión precedente y teniendo en consideración lo previsto en el artículo 785 del Código de Procedimiento Civil, se dicta el siguiente fallo.

Vistos:

Se reproduce la sentencia en alzada y sus rectificaciones, con excepción de los considerandos (ya modificados) cuarto, décimo, vigésimo primero, vigésimo cuarto y vigésimo séptimo, todos los cuales se eliminan.

De las citas legales, se suprimen las referencias a los artículos 15 N°3, 16 y 391 N° 1 del Código Penal.

Y, se tiene en su lugar y además presente:

1º) Que, conforme a lo expresado en los considerandos undécimo a décimo tercero del fallo de casación, cuyos fundamentos han de entenderse reproducidos para estos efectos, los hechos asentados en el considerando tercero del laudo que se revisa participan en la figura penal establecida en el artículo 141, incisos 1º y 3º del Código Penal vigente a la fecha de los hechos.

En efecto, en autos se encuentra acreditado que existió un encierro de las víctimas, sin que existiese un derecho para ello, limitándoles su libertad a causa de acusaciones que, en sí, no conforman ninguna clase de justificación legal para ese cometido y que, además, en su desarrollo, se ejerció un abuso por parte de sus celadores, quienes ejecutaron, en su contra, un grave daño que terminó con la muerte de ambos afectados.

En ese entendido, se cumplen con todos y cada uno de los presupuestos legales que se requieren para tener por acreditada la consumación de dicha



figura delictiva y que, de paso, permite desestimar aquellas que los acusadores particulares y las defensas enarbolaron a su turno pues, en concreto, no existen probanzas suficientes para determinar la existencia de un delito de inhumación ilegal cometidos por los enjuiciados, de tal manera que dicha imputación ha de ser desestimada. Lo mismo ocurre con la figura planteada por la defensa del sentenciado Castro Guajardo, quien solicitó la recalificación del ilícito a un delito de homicidio simple, petición que será desatendida ya que, como se dijo, tal circunstancia conforma precisamente el grave daño que califica el delito de secuestro y por el que han de ser sancionados.

2º) Que, en cuanto a la participación de los acusados en los ilícitos determinados, necesario resulta recordar que el artículo 15 N° 1 del Código Penal establece: *“Se consideran autores: 1. ° Los que toman parte en la ejecución del hecho, sea de una manera inmediata y directa; sea impidiendo o procurando impedir que se evite.”*

Dicho lo anterior, sabido es que, tomar parte en la ejecución del delito no significa en nuestro sistema únicamente realizar una forma de la descripción del tipo penal sino cualquiera de los supuestos empíricos, en este caso, del N° 1 del artículo 15 del Código Penal. El fundamento de ello radica en que no es una consideración formal respecto de la descripción típica, sino material, emanada de la existencia del hecho colectivo que abarca las diferentes contribuciones de los distintos intervinientes, que se imputan recíprocamente para otorgarle a cada uno el título de autor. Ese hecho colectivo se define por el acuerdo o concierto para su realización: el conocimiento y voluntad de realización de cada una de las partes del hecho individual que a cada uno corresponde y del hecho conjunto que de este modo se materializa, razón por la cual, aunque individualmente ninguno de los coautores realice el tipo penal,



todos responden como si cada uno lo hubiera realizado completamente, imputándoseles a unos y otros, recíprocamente, sus contribuciones individuales.

En este caso, existió una intervención directa en la dinámica delictiva, desde que los partícipes ejecutaron parte de las acciones que terminaron en la muerte de Agustín Contreras Santander y Manuel Jesús Valencia Cáceres, de tal forma que deben responder a este título de autoría en lo que respecta al delito que nos convoca, esto es, en calidad de autor del artículo 15 N° 1 del Código Penal.

3°) Que, en lo referente a la circunstancia planteada por las defensas de los sentenciados Marambio, Lobos y Castro, en orden a considerar que sus conductas obedecieron al cumplimiento de órdenes militares antijurídicas, tal como establece el artículo 211 del Código de Justicia Militar, bien cabe anotar que dicha norma establece: *“Fuera de los casos previstos en el inciso segundo del artículo 214, será circunstancia atenuante tanto en los delitos militares como en los comunes, el haber cometido el hecho en cumplimiento de órdenes recibidas de un superior jerárquico. Y si ellas fueren relativas al servicio podrá ser considerada como atenuante muy calificada.”*

Dicho lo anterior, de la descripción anotada, aparece como necesario que exista una orden del superior, la que debe ser relativa al servicio, que sea dada en uso de atribuciones legítimas y, si la orden tiende notoriamente a la perpetración de un delito, que sea representada por el inferior e insistida por el superior.

En este orden de ideas, ninguno de los presupuestos descritos se cumple pues, en primer lugar, en el caso del encausado Marambio, según sus dichos y de acuerdo con los supuestos de hecho acreditados, fue una decisión de él, en



conjunto con Martínez, proceder a interrogar y golpear a los detenidos. Es él quien aparece provisto de mando e incluso, en su momento, permitió la liberación de un tercer detenido, lo cual denota su posición que, por ello, permite descartar a su respecto la minorante planteada.

En lo que respecta a los sentenciados Lobos y Castro, ellos justifican su accionar, señalando que cumplieron una orden militar que, en el caso del segundo, se la atribuye al Teniente Martínez. Sin embargo, pese a que, en su momento se inició un proceso militar a causa de lo sucedido, no existe otro antecedente que permita tener por cierto que ambos representaron la ilicitud de su accionar. Es más, en contraposición a esta conducta, en autos existe la declaración de Ricardo Leonel Villarroel Martínez, quien depone sobre lo que observó en ese momento y, a diferencia de lo expresado por las defensas, no existe esta suerte de oposición a las órdenes militares que se le habrían impartido a ambos sino más bien concurrieron con sus acciones al funesto final, de tal manera que tampoco se cumple con el requisito que se analiza a propósito de la minorante en estudio, debiendo así quedar descartada.

4°) Que, en lo referente a la atenuante del numeral 6° del artículo 11 del Código Penal, planteada en favor de todos los sentenciados, la misma ha de reconocérseles por carecer de anotaciones prontuariales pretéritas al hecho delictivo.

Empero, en lo que respecta a los sentenciados Lobos y Castro, dicha minorante ha de serles reconocida de una mayor preeminencia, es decir, ella tiene la calidad de muy calificada pues, a su respecto, no solo les favorece la corta edad que ellos tenían al momento de ejecutar el ilícito - 19 años - sino que, además, en esos momentos se encontraban haciendo el servicio militar obligatorio, siendo solo soldados conscriptos y, para el caso de ellos, se



evidencia una escasa preparación castrense que ha de ser considerada y que, en el caso del sentenciado Castro, se acentúa ya que ni siquiera había completado sus estudios medios, antecedentes que repercuten en este plano y es por ello que se le considera dicha atenuante en carácter de muy calificada.

5º) Que, en cuanto a la penalidad, el ilícito por el cual vienen siendo juzgados los sentenciados corresponde al delito de secuestro calificado, figura prevista y sancionada en el artículo 141, inciso 3º del Código Penal de la época: “Si el encierro o la detención se prolongare por más de noventa días, o si de ellos resultare un daño grave en la persona o intereses del encerrado o detenido, la pena será presidio mayor en cualquiera de sus grados.”

En el caso de autos, al corresponder a una reiteración de crímenes de una misma especie, resultando ser más favorable para los sentenciados, se aplicará la regla prevista en el artículo 509 del Código de Procedimiento Penal, con lo cual, la pena prevista para el delito se aumentará en un grado, recorriendo la misma el rango del presidio mayor en su grado mínimo al presidio perpetuo simple.

Ahora, respecto del sentenciado Gustavo Delfín Marambio Olmos, se le ha reconocido una minorante de responsabilidad criminal, de tal manera que, en consonancia con el artículo 68 del Código Punitivo, no se aplicará el máximo del tramo punitivo indicado.

Finalmente, con relación a los condenados Arcadio de las Mercedes Lobos Cisternas y Luis Marcos Castro Guajardo, a su respecto les favorece una minorante, la cual tiene el carácter de muy calificada, de tal forma que se rebajará el tramo inferior de la pena divisible, con lo cual se le sancionará en este marco conforme se expresará en lo resolutive.



6º) Que, dada la extensión de la condena y cumpliéndose, en el caso de Lobos y Castro, los requisitos legales que establece el artículo 15 bis de la Ley N° 18.216, la pena impuesta se les sustituirá por la libertad vigilada intensiva.

7º) Que, en consecuencia, atendido lo razonado y concluido precedentemente, no se seguirá el parecer del Ministerio Público Judicial, el que de acuerdo con el artículo 514 del Código de Procedimiento Penal, fue de la opinión de confirmar la sentencia en alzada sin declaración.

Y visto, además, lo dispuesto en los artículos 11 N° 6, 15 N° 1 y 141 del Código Penal, se resuelve:

I. Que, se **CONFIRMA** la sentencia definitiva de fecha veinte de noviembre de dos mil diecinueve, escrita a fojas 1634 y siguientes, complementada por las resoluciones que corren a fojas 1792 y 1841, de fechas trece de agosto de dos mil diecinueve y veinticuatro de junio de dos mil veinte, respectivamente, todas pronunciadas por el señor Mario Carroza Espinosa, Ministro en Visita Extraordinaria, **CON LAS SIGUIENTES DECLARACIONES:**

1. Se condena a **GUSTAVO DELFIN MARAMBIO OLMOS**, ya individualizado en autos, en su calidad de autor de los delitos de Secuestro Calificado de Agustín Contreras Santander y Manuel Valencia Cáceres, perpetrados el día 11 de septiembre de 1974 en la ciudad de Santiago, previsto y sancionado en el inciso final del artículo 141 del Código Penal de la época, a sufrir la pena única de **CINCO AÑOS Y UN DIA** de presidio mayor en su grado mínimo, más la accesoria de inhabilitación absoluta perpetua para cargos y oficios públicos y derechos políticos y la de inhabilitación absoluta para



profesiones titulares mientras dure la condena y al pago de las costas de la causa;

2. El referido sentenciado deberá cumplir la pena impuesta de manera efectiva, la cual se le comenzará desde que se presente o sea habido, sirviéndole de abono los días que permaneció privado de libertad, esto es, desde el día 13 al 17 de abril de 2015;

3. Se condena a **ARCADIO DE LAS MERCEDES LOBOS CISTERNAS** y **LUIS MARCOS CASTRO GUAJARDO**, ya individualizados en autos, en su calidad de autores de los delitos de Secuestro Calificado de Agustín Contreras Santander y Manuel Valencia Cáceres, perpetrados el día 11 de septiembre de 1974 en la ciudad de Santiago, previsto y sancionado en el inciso final del artículo 141 del Código Penal de la época, a sufrir la pena única de Homicidio Calificado de Agustín Contreras Santander y Manuel Valencia Cáceres, perpetrado el 11 de septiembre de 1.974 en Santiago, previsto y sancionado en el inciso final del artículo 141 del Código Penal de la época, a sufrir la pena única de **CUATRO AÑOS** de presidio menor en su grado máximo, más las accesorias de inhabilitación absoluta perpetua para derechos políticos y la inhabilitación absoluta para cargos y oficios públicos durante el tiempo que dure la condena y al pago de las costas de la causa;

4. Por reunirse en la especie los requisitos indicados en los artículos 15, 15 bis y 16 de la Ley N° 18.216, **LOBOS**



CISTERNAS y CASTRO GUAJARDO cumplirán la pena corporal bajo la modalidad de la libertad vigilada intensiva, por el tiempo de la condena, debiendo cumplir durante el período de control con el plan de intervención individual que se apruebe y con las condiciones establecidas en las letras a), b) y c) del artículo 17 de la referida ley, debiendo fijarse audiencia en su oportunidad y para tales efectos.

Ambos sentenciados deberán presentarse al Centro de Reinserción Social de Gendarmería de Chile que corresponda, dentro del plazo de cinco días, contados desde que estuviere firme y ejecutoriada esta sentencia, bajo apercibimiento de despacharse orden de detención en su contra.

Para el evento que les sea revocada la forma de cumplimiento de libertad vigilada intensiva, les servirá de abono el tiempo que estuvieron preventivamente privados de libertad con ocasión de esta causa, esto es, desde el 17 al 26 de noviembre de 2015, en ambos casos.

II. Que, en lo demás, se confirma el fallo y las resoluciones rectificatorias.

Redacción a cargo del Ministro Sr. Matus.

Regístrese y devuélvanse.

Rol N° 36.743-2021

Pronunciado por la Segunda Sala de la Corte Suprema integrada por los Ministros Sres. Manuel Antonio Valderrama R., Leopoldo Llanos S., Jean Pierre Matus A., la Ministra Sra. María Cristina Gajardo H., y la Abogada Integrante Sra. Pía Tavolari G. No firman el Ministro Sr. Llanos y la Ministra Sra. Gajardo no obstante haber estado en la vista de la causa y acuerdo del fallo, por estar con permiso y en comisión de servicios, respectivamente.



MANUEL ANTONIO VALDERRAMA
REBOLLEDO
MINISTRO
Fecha: 02/05/2024 14:48:23

JEAN PIERRE MATUS ACUÑA
MINISTRO
Fecha: 02/05/2024 14:48:24

PIA VERENA TAVOLARI GOYCOOLEA
ABOGADO INTEGRANTE
Fecha: 02/05/2024 14:26:10



Autoriza el Ministro de Fe de la Excma. Corte Suprema

JORGE EDUARDO SAEZ MARTIN
MINISTRO DE FE
Fecha: 02/05/2024 15:09:41

En Santiago, a dos de mayo de dos mil veinticuatro, notifiqué en Secretaría por el Estado Diario la resolución precedente, como asimismo personalmente al Fiscal Judicial de la Corte Suprema, quien no firmó.

JORGE EDUARDO SAEZ MARTIN
MINISTRO DE FE
Fecha: 02/05/2024 15:09:42

